

to a los Defensores de Oficio y a los Agentes del Ministerio Público, no es menester que llenen tal requisito para que continúen en sus empleos, puesto que la ley en referencia no reza con ellos.

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 8

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 8.—Panamá, 20 de Enero de 1925.

En memorial del 14 del mes en curso solicita el señor Manuel de J. Jaén que se le expidan credenciales donde se acredite que reúne los requisitos necesarios para desempeñar el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a fin de presentarse con ellas ante el tribunal expresado en demanda del certificado de idoneidad para ejercer la abogacía, conforme lo exige la ley 55 de 1924. A esa solicitud acompaña el postulante la documentación de rigor.

Para resolver se considera lo siguiente:

La ley 55 de 1924 no exige que se presenten las credenciales para desempeñar los cargos de Magistrado o de Juez del Circuito, expedidas por la autoridad encargada por el legislador de establecer, en casos determinados, si se poseen o no los requisitos de rigor, con el propósito de obtener certificado de idoneidad para ejercer la abogacía. De la lectura de ella se desprende que únicamente debe demostrarse ante el tribunal encargado de expedir los certificados en cuestión, que se reúnen las cualidades o condiciones requeridas por la nombrada ley. Por otra parte, el Poder Ejecutivo puede otorgar credenciales para acreditar que se reúnen los requisitos exigidos en el artículo 93 de la Constitución para desempeñar el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, solamente cuando se trata de personas que han sido ya nombradas para ese empleo, pues de conformidad con el artículo 6 del Código Judicial, "el empleo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se adquiere plenamente por el nombramiento **SEGUIDO DE LA COMPROBACION DE QUE EL NOMBRADO REUNE LAS CONDICIONES CONSTITUCIONALES O LEGALES PARA EJERCER EL CARGO**, y de la oportuna posesión, que se tomará ante el Presidente de la República."

En mérito de lo expuesto,

Declarar que es improcedente, por las razones expuestas, las solicitud del señor Manuel de J. Jaén.

Comuníquese y publíquese,

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 33

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 33.—Panamá, 19 de Febrero de 1925.

El Tesorero Municipal de Colón ha dirigido a este Despacho, en la fecha, la siguiente consulta:

Suplico a usted resolverme cuanto antes siguiente consulta: Pueden los señores Hernando Walker H. y José Aníbal Arosemena Carrasco, Concejal principal y segundo suplente, respectivamente, desempeñar los cargos de Colectores de la Contribución de Caminos, nombrados por el suscrito en su carácter de Tesorero de la Junta Distritorial de Caminos, sin quedar inhabilitados para ocupar sus curules en el Consejo Municipal?"

Para resolver la cuestión anterior se considera lo siguiente:

La contribución de caminos tiene carácter municipal, puesto que deben pagarla en cada Distrito sus respectivos vecinos; está destinada a la conservación y mejora de los caminos de los mismos Distritos y debe ser pagada al correspondiente Tesorero Municipal. De modo que todo pago que legalmente se verifique con el producto de la contribución nombrada, se hace con fondos municipales. Ahora bien, el artículo 595 del Código Administrativo prohíbe a los miembros principales y suplentes de los Concejos Municipales desempeñar cualquier empleo pagado con dineros distritoriales, bajo pena de pérdida de aquella calidad; mientras que por otra parte, el artículo 14 de la Ley 30 de 1919 veda a los mismos funcionarios hacer contratos con el Municipio en que hayan sido elegidos durante todo el período de su elección. En cuanto a la sanción aplicable a quienes infrinjan esta última prohibición, el Poder Ejecutivo tiene decidido que es la misma que debe recibirse cuando se viola el artículo 695 de la excerta citada más arriba, que puede y debe aplicarse por analogía, sin perjuicio de la sanción que establece el Código Penal en su artículo 165.

En mérito de lo expuesto,

SE RESUELVE:

Ningún concejal puede desempeñar en forma alguna el cargo de Colector de la Contribución de Caminos. Si alguno llegare a desempeñarlo, pierde IPSO FACTO su puesto en el respectivo Concejo. En consecuencia, los señores Hernando Walker H. y José Aníbal Arosemena Carrasco no pueden ser, en Colón, Colectores de la contribución de caminos, por ser miembros del Consejo de ese Distrito.

Comuníquese y publíquese,

El Secretario de Gobierno y Justicia,

R. CHIARI.

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 35

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 35.—Panamá, 7 de Marzo de 1925.

El señor Justo P. Espino, Juez Segundo del Circuito de Los Santos, en oficio número 112 del 3 del mes en curso, ha pedido a este Despacho que le conceda permiso especial para gestionar en una acción civil ordinaria que por perjuicios va a entablar contra el señor Lorenzo Gracelli, súbdito italiano domiciliado en Tonosí. El postulante funda esta solicitud en el artículo 418 del Código Judicial.

Para resolver se considera que las autoridades del Poder Judicial forman una jerarquía que según la doctrina de la división de los poderes públicos consagrada en los artículos 51 y 52 de la Constitución, es independiente del Poder Ejecutivo, de modo que éste no puede considerarse como el superior de un Juez de Circuito para el otorgamiento de la autorización de que se trata. Ahora bien, como según el artículo 92 de la Constitución, en los Tribunales y Juzgados ordinarios que la ley establezca, los Magistrados y Jueces serán nombrados por la Corte, Tribunal o Juez inmediatamente superior en jerarquía, y como según el numeral 4o. del artículo 90 del Código Judicial, corresponde a la Corte Suprema nombrar los Jueces de Circuito, es absolutamente claro y está fuera de toda duda que el superior de un Juez de Circuito es la Corte Suprema de Justicia. De manera, pues, que es a ese Tribunal al que el señor Espino, Juez Segundo del Circuito de Los Santos, debe hacer la solicitud de que se trata, de acuerdo con el artículo 418 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto,

SE RESUELVE:

Manifestar al señor Justo P. Espino, Juez Segundo del Circuito de Los Santos, que el Poder Ejecutivo carece de facultad para darle el permiso que solicita en su comunicación número 112 del 3 de Marzo en curso, de que se ha hecho mención.

Comuníquese y publíquese,

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 43

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 43.—Panamá, 23 de Marzo de 1925.

En memorial del 7 del mes en curso ha hecho a este Despacho el señor Rubén de D. de la Rosa, vecino de Cañazas, varias consultas relativas a la manera de aplicar disposiciones del Código Judicial y de la Ley 52 de 1919, sobre

juicio oral en materia criminal. Respecto de esas consultas se considera lo siguiente:

Que la resolución de consultas, en general, tiene por objeto sentar jurisprudencia en la aplicación de las leyes cuyo sentido no es claro, a fin de que el cumplimiento de las mismas sea uniforme. Y si esto es así, queda de manifiesto que cada Poder del Estado sólo puede interpretar aquellas leyes cuya aplicación inmediata le corresponde, puesto que otra cosa sólo podría tender a que de ellos hiciera sugerencias o indicaciones a otro, respecto a cómo había de cumplir sus funciones, cosa que va contra el principio político de la separación de los Poderes Públicos, consagrado en los artículos 51 y 52 de la Constitución. En el respecto indicado únicamente hay diferencia en cuanto a la forma como se efectúa la interpretación, siendo particularidad del Poder Ejecutivo la de verificarlo en virtud de simples consultas que se le dirijan, lo cual depende de sus especiales atribuciones. Entre estas juega papel importante la de reglamentar las leyes, en donde se deriva aquella otra de poder resolver las consultas abstractas que se le formulen, consagrada en el numeral 8o. del artículo 629 del Código Administrativo que dice así:

“Resolver las consultas que se le hagan relativamente a la manera de aplicar las leyes de los ramos administrativo y fiscal.”

Volviendo sobre lo expuesto al principio, se puede agregar, en atención a lo dicho después, que las consultas que resuelva el Poder Ejecutivo poseen, además, el carácter de verdaderas reglas de obligatorio cumplimiento, siempre que ellas versen sobre las materias indicadas en la disposición transcrita.

No tratándose, pues, en el presente caso, de leyes de los ramos administrativo y fiscal, no puede decidirse la consulta del señor de la Rosa, y así se resuelve la misma.

Comuníquese y publíquese,

El Secretario de Gobierno y Justicia,

R. CHIARI.

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 50

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 50.—Panamá, 6 de Abril de 1925.

En memorial fechado el 4 del mes en curso dice el señor Daniel George, vecino de esta ciudad, lo siguiente:

“Señor Secretario de Gobierno y Justicia.—Presente.—Consúltale si de los términos señalados en los artículos 606 y 607 del Código Administrativo para que entren a regir las leyes una vez promulgadas, deben descontarse los días feriados y de vacantes.”

Para resolver se tiene en cuenta lo siguiente: El artículo 606 del Código Administrativo sienta como regla general que las leyes entren a regir treinta días después de promulgadas o publicadas en el periódico oficial, en conside-

ración a que probablemente después de ese plazo ellas han llegado a conocimiento de los habitantes del territorio nacional, o a que, por lo menos, es de presumirse así. Al respecto se observa que el objeto de la promulgación de las leyes consiste, precisamente, en que se conozcan ampliamente por el público obligado a observar sus mandatos, conocimiento que puede adquirirse, una vez publicada la ley y puesto en circulación el periódico oficial en que se ha insertado, cualquier día, ya sea feriado, ya de vacante, por lo que no se ve la razón para que del término de que se trata se descuenta esta clase de días. A propósito cabe observar que existen varios sistemas respecto al tiempo necesario para que la ley promulgada se considere obligatoria. De tales sistemas los dos principales son el SUCESIVO, adoptado, entre otras, por la legislación francesa, y el SINCRONICO, seguido por la italiana y la nuestra. Sobre el particular dice Pascual Filori lo siguiente:

“El sistema sincrónico es el que ofrece menos inconvenientes. La ley se hace para el pueblo, y su autoridad debe extenderse a todos. La ley nueva tiende a mejorar la condición de las personas, y justo es que todos indistintamente y al mismo tiempo puedan disfrutar de las ventajas que concede. No debe haber, ni aun accidentalmente, diversidad de condición entre los ciudadanos de un mismo Estado. El peligro del fraude se atenúa con la publicidad de las discusiones que preceden a la formación y a la publicación de las leyes en los Estados regidos por Gobierno representativo, y con la pronta transmisión o comunicación de la reforma a todas partes. Así la ciencia moderna declara preferible el sistema sincrónico y el legislador italiano lo ha aceptado disponiendo que las leyes sean obligatorias en todo el Reino después de transcurridos quince días desde aquel en que fué promulgada.”

Contra lo dicho podría argüirse que el inciso segundo del artículo 612 de la excerta nombrada más arriba dispone que “en los plazos de días que señalan las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario”, y como el artículo 606 no hace ésto, es preciso descontar del término de días que en el mismo se fija, los FERIADOS y DE VACANTES. A primera vista, este argumento parece de fuerza, pero bien mirado, se cae en la cuenta de que la aceptación de la tesis que con él se sustenta conduce al absurdo de que una ley, al mismo tiempo puede estar y no estar en vigencia. Pongamos el caso de una ley que regule derechos civiles. Debe entrar a regir en el término fijado en el artículo 606 del Código Administrativo. Pero como la Corte está en vacaciones durante un mes, resulta que mientras que respecto de ese alto Tribunal el término fijado para la vigencia de la ley queda suspendido durante el mismo mes si ella se promulga en los días en que comienzan las vacaciones o poco antes, no resulta así para los Jueces de Circuito que quedan actuando. Conclusión: respecto de los particulares, la ley está en vigencia, puesto que ellos no han tenido días vacantes: respecto del Juez que conocerá del asunto, lo mismo, pero no rige para los Magistrados que estaban en vacaciones, o al menos, no pueden tramitarse ante ellos acciones que dimanen de dicha ley, lo que es absurdo, y en buena y saludable lógica, interpretación que conduce al absurdo debe rechazarse como errónea. Además, de aceptarse la interpretación que se impugna, las leyes no entrarían a regir al mismo tiempo en toda la República, puesto que cada Municipio tiene sus días feriados especiales, distintos a los de los otros.

Y este sistema de vigencia anacrónico está en contradicción con el adoptado en nuestras leyes, según queda dicho. Por consiguiente, es forzoso concluir que lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 612 del Código Administrativo únicamente concierne a los términos que se fijan en las leyes y actos oficiales para hacer valer ante funcionarios públicos algún derecho o para instaurar alguna otra reclamación. Es claro que actos de la naturaleza expresada únicamente pueden tener lugar cuando tales funcionarios despachan, es decir, en días y horas hábiles, en días que regularmente no son ni feriados ni de vacantes. De modo que lo dispuesto en esta disposición es sólo un mandato para que los funcionarios públicos no computen días en que no han estado actuando en plazos relacionados directamente con el cumplimiento de sus deberes.

Los mismos argumentos que se acaban de exponer valen cuando se trata de determinar cómo han de computarse los términos a que se refiere el artículo 607 del Código Administrativo, que trata del mismo asunto que el anterior. Al respecto puede agregarse que el artículo 607 es una confirmación de lo dicho respecto del objeto y significado del artículo anterior.

Por lo expuesto,

SE RESUELVE:

De lo dispuesto en los artículos 606 y 607 del Código Administrativo, se desprende que para determinar la fecha en que entran a regir las leyes no deben descontarse los días feriados o de vacantes de los términos a que se alude en tales artículos.

Comuníquese y publíquese,

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 52

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 52.—Panamá, 13 de Abril de 1925.

El Alcalde de Aguadulce, en telegrama de esta fecha, ha hecho a este Despacho la siguiente consulta:

“Si estando derogado el Código Penal de 1916, es de competencia de los Alcaldes conocer de los delitos de calumnia e injurias de que trata el artículo 936 del Código Administrativo.”

Para resolver se considera lo siguiente:

Se observa, en primer lugar, que el Código Administrativo fué aprobado casi al mismo tiempo que el Código Penal de 1916 y que las alusiones a la ley penal que en aquél se hacen se refieren precisamente a éste. Ahora bien, el Código Administrativo, en su artículo 935, dispone que cuando se trata de los delitos de injurias y calumnia a los cuales se refiere el Título XI del Código

Penal, la persona ofendida puede someter, si lo prefiere, el juzgamiento del asunto a la Policía, la cual ha de aplicar, entonces, los mandatos del referido Título XI en cuanto a las definiciones de las violaciones pero no en cuanto a las penas que para cada una de ellas se establecen allí, pues en esto, que es lo esencial para el caso, el artículo 936 del Código Administrativo y el siguiente, modifican el Código Penal de 1916. Y por si quedare alguna duda respecto al carácter de modificativos que poseen los indicados artículos del Código Administrativo respecto del Código Penal de 1916, obsérvese que el artículo anterior al citado por el consultante, en su parte final, le da dicho carácter, expresando que la Policía, en tales circunstancias, aplicará el Título XI del Código Penal de 1916, CON LAS MODIFICACIONES QUE A CONTINUACION SE EXPRESAN.

Sentado, pues, que los artículos 936 y siguientes del Código Administrativo son reformativos del Código Penal de 1916, es forzoso concluir que fueron derogados por el artículo 383 del Código Penal vigente, que deroga expresamente el Código Penal de 1916 y todas las leyes que lo adicionan y reforman. Y estando, como se ha expresado, derogadas las disposiciones del Código Administrativo en que se señalan las penas que por calumnia e injurias podían imponer las autoridades de Policía, es claro que estas carecen actualmente de facultad para juzgar dicha clase de contravenciones porque no tiene penas que aplicar. Sabido es que nadie puede ser juzgado ni castigado sino de conformidad con una ley vigente a tiempo de ejecutarse el hecho que motiva el juicio, que defina tal hecho como punible y que LE SEÑALE PENA, el último de cuyos requisitos hace falta respecto de las autoridades de Policía, en el presente caso.

En mérito de lo expuesto,

SE RESUELVE:

Los Alcaldes no pueden conocer ya del juzgamiento de los delitos de calumnia e injurias por estar derogadas las disposiciones del Código Administrativo en que se señalaban las penas que las autoridades de Policía podían imponer en estos casos

Comuníquese y publíquese,

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 111

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 111.—Panamá, 24 de Junio de 1925.

En memorial del 15 del mes en curso, ha hecho a este Despacho el señor Abelardo Cruz D., vecino de Aguadulce, las siguientes consultas:

“Primero. Siendo una de las atribuciones de los Concejos Municipales, según el numeral tercero del artículo 691 del Código Administrativo,

“crear empleos para el servicio del Distrito, señalándoles sus atribuciones, duración, remuneración sin contravenir las leyes; pueden o no los Alcaldes hacer nombramientos sin previa creación por parte de los Concejos, de Inspectores de Tráfico, señalándoles atribuciones, duración y remuneración, saliendo esa remuneración de los contribuyentes de impuesto sobre vehículos que tengan el carácter de morosos, o de los multados por infracción del reglamento de tráfico.”

“Segundo. Usurpan o no jurisdicción, pisando en terreno ajeno, los Alcaldes que así proceden, y de consiguiente son nulos los actos que ejecuten los empleados nacidos de ese procedimiento viciado.”

“Tercero. Se reduce o no la facultad de los Alcaldes a nombrar la persona para el puesto público, previa creación del cargo por las entidades ya referidas.”

Como para que un funcionario invista a otro de un empleo es necesario que ese empleo haya sido creado por quien tenga poder para ésto, que se le hayan señalado atribuciones precisas a tal empleo y que el que va a hacer el nombramiento tenga la debida autorización, y como fuera del Presidente, Vicepresidente y Secretario del Concejo y del Tesorero Municipal, los empleados municipales los nombra el Alcalde, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 30 de 1919, la presente cuestión queda reducida a saber si los Alcaldes de los Distritos pueden crear empleos para el servicio del respectivo Municipio, señalarles sueldos y disponer de qué rentas municipales debe pagarse dicho sueldo.

Planteada así la presente consulta, se pasa a resolverla mediante las siguientes consideraciones:

El artículo 132 de la Constitución dice que corresponde a los Alcaldes la acción administrativa en el Municipio, como Agentes del Gobernador, y como mandatarios del pueblo. De esto se deduce que la labor de los Alcaldes debe encaminarse principalmente a obedecer y a hacer que se obedezcan las disposiciones gubernamentales de carácter administrativo que expidan para que se observen en la República o en parte de ella, quienes estén facultados para el efecto. Entre esta clase de medidas están las que conciernen a la administración del Distrito, que según el artículo 131 de la Constitución incumbe a los Concejos, medidas cuya naturaleza ha sido detallada en los artículos 691 y 692 del Código Administrativo, concerniente a las atribuciones de las citadas entidades. Y precisamente el numeral 3o. del artículo 691 citado, señala como atribución de los Concejos la de crear empleos para el servicio del Distrito, señalándoles sus atribuciones, duración y remuneración sin contravenir las leyes. En cambio, entre las atribuciones de los Alcaldes, señaladas de modo completo y detallado en el artículo 711 del Código Administrativo y en algunos otros del Libro Cuarto de la misma excerta, que desarrollan la disposición constitucional citada aquí en primer término, no aparece ninguna que faculte a los Alcaldes para crear empleos y señalarles sueldos, y menos para dictar medidas concernientes a la inversión de los fondos municipales. Esto último corresponde, según el artículo 131 de la Constitución, y concordantes de la excerta nombrada, a los mismos Concejos. Y sabido es que ningún funcionario puede hacer otra cosa que aquéllo para que ha sido autorizado legalmente. Ahora bien; la consecuencia lógica de lo dicho es que es nulo todo acto de un Alcalde en virtud del cual cree un empleo, le señale sueldo y disponga

de qué rentas se le debe pagar ese sueldo, por ser ésto contrario a la Constitución y a las leyes, según resulta de lo que queda dicho.

En mérito de lo expuesto.

SE RESUELVE:

Primero. Los Alcaldes carecen de facultad para crear empleos para el servicio del Distrito señalándoles sueldo y destinando rentas para pagar esos sueldos y carecen también de facultad para hacer cualquiera de estas tres cosas; en consecuencia, es nulo cualquier acto que ejecuten en ese sentido, así como los que se deriven del mismo.

Segundo. Quedan exceptuados de lo dicho anteriormente los casos en que el Concejo o la ley hayan facultado a los Alcaldes de modo expreso para crear empleos, señalarles atribuciones y sueldos, y para fijar el modo de pagar éstos.

Comuníquese y publíquese,

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 121

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 121.—Panamá, 3 de Julio de 1925.

El 30 de Agosto de 1916, celebró el Municipio de Panamá contrato de comodato para el uso del lote de playa que se encuentra al frente de la rampa del mercado de esta ciudad, con los señores Florencio Arosemena y Carlos Bieberache. Según la cláusula segunda de dicho contrato, los contratista o comodantes debían comenzar a hacer uso del expresado trozo de playa precisamente dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que tal contrato fuera elevado a escritura pública, cosa que debía hacerse apenas fuera aprobado por el Concejo, requisito indispensable para la validez del mismo contrato. De acuerdo con lo expuesto, fué aprobado por la Municipalidad de Panamá, y elevado a escritura pública en el mismo año de 1916, sin que dentro de los tres años siguientes se cumplieran las estipulaciones de la cláusula segunda a que se ha hecho referencia. En virtud de esa falta de cumplimiento, sin cause justa comprobada, de una de las partes, el contrato en cuestión caducó apenas vencido el término de tres años a que se ha hecho referencia más arriba; de modo que carece por completo de existencia desde hace más de cinco años. No obstante ésto, el Concejo de Panamá ha pretendido revivirlo sometiéndolo a una nueva aprobación por medio del Acuerdo número 22 del 20 del mes en curso, a pesar de que ningún contrato puede revivirse por la sola voluntad de una de las partes, pues jurídicamente no es posible la existencia de convenios unilaterales. Lo dicho hace que el nombrado Acuerdo sea nulo por contrario a la ley, además de inconveniente, pues en virtud de él, se ve a obstruir casi

por completo un lote de playa en donde ciertos agricultores y labriegos acostumbra arrimar las pequeñas embarcaciones en que transportan a esta capital el producto de su trabajo y en donde, además, suelen venderlo, lo cual les ocasionaría notables perjuicios.

En mérito de lo expuesto, y teniendo en cuenta los artículos 703 y 705 del Código Administrativo,

SE RESUELVE:

Suspender, como se suspende, el Acuerdo número 22 de 20 de Junio del corriente año, por el cual se aprueba un contrato, expedido por el Concejo de Panamá.

Se ordena al Fiscal 1o. del Circuito de Panamá que demande ante el Juez competente la nulidad de dicho acuerdo.

Comuníquese y publíquese,

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 130

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 130.—Panamá, 16 de Julio de 1925.

Los señores Guillermo Rangel, Ramón Villarreal y E. Rodríguez, en memorial de esta misma fecha, han hecho al Poder Ejecutivo, por el órgano de esta Secretaría, las siguientes consultas:

“ES LEGAL EL DECRETO NUMERO 31 DE FECHA 15 DEL PASADO, EXPEDIDO POR EL SEÑOR ALCALDE DE ESTE DISTRITO, POR EL CUAL LES NOMBRO SUPLENTE A LOS CORREGIDORES DE LOS BARRIOS DE SAN FELIPE Y CHORRILLO, SANTA ANA Y CALIDONIA? LOS ACTOS DE LOS CIUDADANOS NOMBRADOS POR DICHO DECRETO, CASO DE EJERCER ESAS FUNCIONES, TIENEN VALIDEZ ALGUNA O SON NULOS?”

Para resolverlas se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

El cargo de suplente del Corregidor no es algo substancialmente distinto del de Corregidor. Un suplente de un funcionario es una persona designada de antemano para reemplazar en seguida a ese funcionario en sus faltas temporales o absolutas, a efecto de evitar que, con la acefalía de los puestos públicos, más o menos prolongada, que podría sobrevenir mientras que se cumplen los trámites de un nuevo nombramiento, se produzcan entorpecimientos o trastornos en la marcha de la administración del Estado en general, de manera que la facultad de hacer un nombramiento debe implicar necesariamente la de designar los respectivos suplentes. No otra cosa es lo que dispone el artículo 760 del Código Administrativo, que dice así:

“La facultad de conferir empleos comprende la de proveerlos en propiedad o interinidad y la de hacer la designación de principales y suplentes en cada cargo público, exceptuando los destinos de elección popular y aquellos respecto de los cuales la ley disponga otra cosa.”

De donde se deduce que los Alcaldes pueden nombrar suplentes a los Corregidores, puesto que el numeral 17 del artículo 711 del Código Administrativo, les confiere a aquéllos la atribución de nombrar a estos funcionarios.

En mérito de lo expuesto,

SE RESUELVE:

No es ilegal el Decreto número 31 del 15 de Junio último, por el cual el Alcalde de Panamá les nombró suplentes a los Corregidores de los Barrios de San Felipe y Chorrillo, Santa Ana y Calidonia; en consecuencia serán legales y válidos los actos que ejecuten, dentro de las atribuciones que les corresponden, esos suplentes en el caso de que entren a desempeñar los empleos respectivos.

Comuníquese y publíquese,

El Secretario de Gobierno y Justicia,

R. CHIARI.

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION No. 42.

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Panamá, 26 de Febrero de 1926.

En memorial del 24 del mes en curso, el señor Julio Valdés ha hecho al Poder Ejecutivo, por el órgano de esta Secretaría, las siguientes consultas:

“1o. El Acuerdo número 5 de 1888 dictado por el Municipio del Distrito de Panamá está o no en vigor, no habiendo sido declarado insubsistente de manera expresa por el Concejo, no siendo incompatible con disposiciones especiales posteriores, ni existiendo ley nueva alguna que regule íntegramente la materia;

2o. En caso de resolver que está en vigor el Acuerdo citado, está o no el Alcalde Municipal obligado a prestar al Presidente del Concejo, la cooperación necesaria como Jefe de Policía, a fin de que ejerza el derecho que le concede el Acuerdo número 5 de 1888?”

Para resolverlas se avanzan las siguientes consideraciones:

El Concejo de Panamá concedió en Diciembre de 1886, por medio del Acuerdo número 7, licencia exclusiva, por el término de 25 años, al señor Manuel F. Díaz, para construir una plaza para lidia de toros, bajo determinadas condiciones. En marzo de 1888 el mismo Concejo, por medio del Acuerdo número 5, que es al que se refiere el señor Valdés, expidió un reglamento precisamente para esa plaza de toros o acaso para otra que entonces debía existir en esta ciudad. Por consiguiente, tal reglamento, de carácter muy especial, no pudo haber extendido su existencia legal más allá del período del privilegio

otorgado al señor Díaz, o, lo sumo, de la duración de la plaza para la cual fué dictado. Pero ni aún en el caso de que el reglamento de que se trata tuviera carácter general estaría él hoy en vigencia por las razones que se verán más adelante. En Diciembre de 1907 la Municipalidad de Panamá expidió el acuerdo número 49, por el cual dictó algunas medidas sobre corridas de toros. En ese mismo Acuerdo se consideran tales corridas como espectáculos públicos, condición que realmente tienen siempre que se llevan a cabo con fines comerciales. Ahora bien, el Código Administrativo de 1918, en sus artículos 1221 a 1237 y en otros, reglamenta íntegramente todo lo relativo a esta materia, inclusive las corridas de toros, motivo por el cual quedaron derogadas todas las disposiciones anteriores que versan sobre el mismo asunto, de acuerdo con las reglas del artículo 36 del Código Civil.

Por lo expuesto,

SE RESUELVE:

Primero: El Acuerdo número 5 de 23 de marzo de 1888, expedido por el Consejo Municipal de Panamá, está derogado.

Segundo: La segunda de las cuestiones planteadas por el señor Valdés queda implícitamente resuelta en el punto anterior.

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 72

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 72.—Panamá, 15 de Abril de 1925.

Vista la comunicación número 10, del 13 de los corrientes dirigida a este Despacho por el señor L. Villanueva Myers, Director de Obras Públicas Municipales, que dice así:

“Acogiendo al artículo 706 del Código Administrativo, y en mi carácter de Director de Obras Públicas Municipales, me dirijo a usted con el objeto de pedirle la suspensión del Acuerdo número 6 de 1916, del Consejo Municipal de Panamá, por el cual se autoriza la celebración de un contrato con el señor Leoncio Féliz para ocupar un pedazo de terreno perteneciente al Parque de Lesseps. Para apoyar mi solicitud me permito acompañar la copia autenticada del citado Acuerdo y, al mismo tiempo, un plano del lote de terreno a que se refiere, junto con sus alrededores. Las razones que me obligan a dar este paso son las siguientes:

“1o. La construcción de uno o más kioscos o edificios que se hagan en este lote, cubrirá el frente del Parque de Lesseps sobre la Avenida Central.

“2o. La construcción de estos edificios será siempre un obstáculo pa-